



CONCEPTO SOBRE EL IMPACTO FISCAL DEL PROYECTO DE LEY 119 de 2025 SENADO “POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA LA LEY 142 DE 1994, PARA ELIMINAR EL COBRO POR CONCEPTO DE RECONEXIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS RESIDENCIALES, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”

CONSIDERACIONES PREVIAS – COMPETENCIA DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA De conformidad con lo dispuesto en la Ley 489 de 1998, en especial lo previsto en su artículo 58 y siguientes, así como en el Decreto 381 de 2012, integrado al Decreto 1073 de 2015, y demás normas concordantes, corresponde al **MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA** la formulación, adopción, dirección y coordinación de las políticas, planes y programas del Sector Minero y Energético, en su condición de entidad rectora de la política pública sectorial.

En atención a lo expuesto, el **MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA**, en ejercicio de las funciones que le han sido constitucional y legalmente asignadas, y a solicitud del **MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO**, se encuentra habilitado y llamado a analizar los eventuales impactos fiscales derivados de su implementación, estimar los costos potenciales asociados, identificar los rubros presupuestales eventualmente afectados y formular consideraciones técnicas que permitan al **MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO** emitir un concepto fiscal informado, consistente y acorde con el marco de responsabilidad fiscal vigente.

El presente documento analiza el posible impacto fiscal asociado exclusivamente al sector eléctrico que podría derivarse de la aprobación e implementación del Proyecto de Ley No. 119 de 2025 Senado. No se consideran los efectos que la iniciativa pudiera generar en otros servicios públicos domiciliarios.

ALCANCE DE LA PETICIÓN

De acuerdo con lo establecido en el oficio 2-2026-006833 del 26 de enero de 2025, la Dirección del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público requirió:

“(...) la valoración del proyecto de ley 119 de 2025 Senado “Por medio de la cual se modifica la Ley 142 de 1994, para eliminar el cobro por concepto de reconexión de los servicios públicos domiciliarios residenciales, y se dictan otras disposiciones”, del que se anexa Gaceta No. 2193 de 2025, que se encuentra en ponencia para primer debate por parte del Congreso de la República.



Esta Dirección ha identificado principalmente que su artículo 2º podría conllevar impacto fiscal, por lo cual se requiere que ese organismo, a más tardar el 9 de febrero de 2026, remita la siguiente información:

Costo anual desagregado en sus principales componentes para 2026 de la aplicación de este artículo, precisando el monto de las apropiaciones con que cuenta ese organismo para atender las obligaciones respectivas o en caso contrario, el monto de adición presupuestal que requiere para dar cumplimiento a estas normas, en el evento de que sea aprobada. Se debe identificar de forma expresa los rubros presupuestales que se verían afectados” (Negrita fuera de texto).

TEXTO ANALIZADO

El proyecto de ley propone adicionar el artículo 142A al texto de la ley 142 de 1994 y realizar unas derogatorias parciales, así:

“ARTÍCULO 142A. CONDICIONES ESPECIALES DE RECONEXIÓN PARA USUARIOS RESIDENCIALES DE ESTRATOS 1, 2 Y 3. No podrá cobrarse valor alguno por concepto de reconexión o reinstalación a los usuarios de inmuebles residenciales pertenecientes a los estratos 1, 2 y 3, cuando la suspensión o corte del servicio haya sido motivada exclusivamente por la mora en el pago de las facturas y esta haya sido subsanada en su totalidad mediante pago o acuerdo.

En tales casos, la empresa prestadora deberá restablecer el servicio en un término máximo de veinticuatro (24) horas a partir de la subsanación de la mora, sin exigir el pago de gastos adicionales.

El incumplimiento de esta obligación configurará falla en la prestación del servicio para todos los efectos legales.

Parágrafo Primero. Esta disposición se aplicará sin perjuicio de la facultad de las empresas para cobrar los costos de reconexión en los casos de fraude, manipulación de redes, o afectación dolosa de las instalaciones.

Parágrafo Segundo. La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios ejercerá especial vigilancia sobre el cumplimiento de lo previsto en este artículo. El incumplimiento de los términos establecidos para la reconexión o la realización de cobros no justificados dará lugar a la imposición de sanciones conforme a la



Ley 142 de 1994, sin perjuicio de las acciones judiciales o administrativas que puedan ejercer los usuarios.

ARTÍCULO 3. Derogatoria parcial. Deróguese el inciso que autoriza el cobro de reconexión a usuarios residenciales de estratos 1, 2 y 3 en los eventos de mora, contenido en los artículos 96 y 142 de la Ley 142 de 1994, y demás disposiciones que le sean contrarias.

ARTÍCULO 4. Vigencia. Esta ley rige a partir de su promulgación, deroga los artículos 96 y 142 de la Ley 142 de 1994 en los términos del artículo anterior y todas las disposiciones que le sean contrarias.”

ANÁLISIS DE IMPACTO FISCAL

En el sector eléctrico, la implementación de las disposiciones propuestas no necesariamente implica un impacto fiscal directo e inmediato sobre el Presupuesto General de la Nación; sin embargo, podría generar efectos fiscales indirectos que deben ser considerados desde una perspectiva regulatoria, tarifaria y empresarial.

En primer lugar, la eliminación del cobro por reconexión para usuarios residenciales de estratos 1, 2 y 3 supone la transferencia del costo operativo asociado a dicha actividad hacia los prestadores del servicio. No obstante, el proyecto de ley no define el tratamiento regulatorio de estos costos ni establece si serán reconocidos dentro de los componentes tarifarios definidos por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG).

Dependiendo de la interpretación regulatoria que se adopte, podrían presentarse tres escenarios: (i) reconocimiento tarifario de los costos de reconexión, con potencial impacto en el costo unitario del servicio y en los requerimientos de subsidios; (ii) absorción de los costos por parte de los comercializadores, con reducción de márgenes operativos; o (iii) una combinación de ambos mecanismos.

En segundo lugar, si bien las actividades de reconexión pueden constituir una fracción relativamente baja de los costos operativos totales, su magnitud efectiva depende de factores como la dispersión geográfica de los usuarios, los costos de desplazamiento de cuadrillas, los procesos administrativos asociados y la frecuencia de suspensiones por mora. En consecuencia, no resulta metodológicamente sólido asumir de manera generalizada que estos costos sean marginales sin evidencia empírica sectorial.

En tercer lugar, la eventual reducción de ingresos o aumento de costos en empresas comercializadoras con participación pública podría traducirse en



impactos fiscales indirectos, tales como menores transferencias de utilidades a entidades territoriales, necesidades de capitalización o presiones adicionales sobre esquemas de subsidios existentes.

Finalmente, la eliminación del cobro por reconexión podría modificar los incentivos de pago de los usuarios, incrementando potencialmente la frecuencia de suspensiones y reconexiones, lo que podría elevar los costos operativos sistémicos del servicio.

En conclusión, si bien el proyecto de ley no genera de forma automática una obligación de gasto público directo, no es posible descartar la existencia de impactos fiscales indirectos derivados de ajustes tarifarios, mayores requerimientos de subsidios o eventuales necesidades de apoyo financiero a empresas públicas del sector eléctrico.

MARCO CONCEPTUAL DE IMPACTO FISCAL

Tipos de impacto fiscal considerados

- Impacto fiscal directo: obligaciones explícitas de gasto o reducción de ingresos del Gobierno Nacional.
- Impacto fiscal indirecto: efectos sobre subsidios, tarifas reguladas o transferencias públicas.
- Impacto fiscal contingente: riesgos asociados a empresas públicas o mixtas del sector eléctrico.
- Impacto cuasi-fiscal: costos trasladados a tarifas que incrementan subsidios financiados con recursos públicos.

IDENTIFICACIÓN DE CANALES DE TRANSMISIÓN FISCAL

Canal 1 – Reconocimiento tarifario regulatorio

Si los costos de reconexión son reconocidos por la CREG como costos eficientes:

1. Posible aumento del costo unitario (CU).
2. Incremento del valor de subsidios a estratos 1–3 financiados con recursos públicos.

Riesgo fiscal: indirecto.

Canal 2 – Absorción empresarial de costos

Si los costos no son reconocidos en tarifa:



1. Reducción de ingresos operativos de comercializadores.
2. Posible deterioro financiero en empresas públicas o mixtas.

Riesgo fiscal: contingente (posibles capitalizaciones futuras para empresas del sector).

Canal 3 – Incentivos económicos y comportamiento de pago

La eliminación del cobro puede:

1. reducir el costo esperado de la mora,
2. aumentar frecuencia de suspensión/reconexión,
3. elevar costos operativos sistémicos.

Riesgo Fiscal: Presión indirecta sobre tarifas y subsidios.

Canal 4 – Impacto territorial

Empresas eléctricas con participación pública:

1. Menores utilidades transferidas a municipios/departamentos,
2. Potencial necesidad de apoyo financiero territorial.

Riesgo fiscal: subnacional.

ESCENARIOS FISCALES REGULATORIOS

Escenario	Tratamiento regulatorio de costos	Impacto tarifario	Riesgo fiscal
Escenario A	Reconocimiento pleno en tarifa	Aumento del CU	Incremento de subsidios
Escenario B	No reconocimiento tarifario	Reducción márgenes empresas	Riesgo contingente empresarial
Escenario C	Reconocimiento parcial	Ajuste tarifario moderado	Riesgo fiscal medio
Escenario D	Aumento de mora y reconexiones	Incremento costos sistémicos	Presión fiscal futura

EVALUACIÓN CUALITATIVA DEL IMPACTO FISCAL

- **Impacto fiscal directo.**

No se identifican obligaciones explícitas de gasto público derivadas directamente del texto del proyecto.

Conclusión: impacto fiscal directo bajo o nulo.



- **Impacto fiscal indirecto**

Puede materializarse si:

- los costos son incorporados al esquema tarifario,
- aumenta el requerimiento de subsidios financiados con recursos públicos.

Nivel de riesgo: medio.

- **Impacto fiscal contingente**

Empresas comercializadoras con participación estatal podrían:

- deteriorar su flujo de caja,
- requerir capitalización futura.

Nivel de riesgo: medio-alto en empresas territoriales con debilidad financiera previa.

- **Impacto cuasi-fiscal**

Posible incremento del gasto público vía subsidios si el CU aumenta.

Nivel de riesgo: medio.

MATRIZ DE RIESGOS FISCALES REGULATORIOS

Riesgo	Descripción	Probabilidad	Impacto fiscal	Nivel de riesgo	Medidas de mitigación
Reconocimiento tarifario de costos	Inclusión de reconexión en CU	Media	Medio	Medio	Definir tratamiento regulatorio explícito en ley
Aumento de subsidios	Mayor CU eleva subsidios	Media	Alto	Medio-alto	Evaluación fiscal previa CREG-MinHacienda
Deterioro financiero de comercializadores públicos	Menores ingresos por reconexión	Media	Medio	Medio	Seguimiento financiero sectorial
Incremento de mora estratégica	Cambio en incentivos de pago	Media-alta	Medio	Medio-alto	Instrumentos alternativos de gestión de cartera
Capitalizaciones públicas futuras	Apoyo financiero a empresas territoriales	Baja-media	Alto	Medio	Evaluación de solvencia empresarial ex ante
Presión fiscal territorial	Menores dividendos de empresas públicas	Media	Bajo-medio	Medio	Planeación financiera territorial



Conclusiones de evaluación fiscal

1. El proyecto de ley no genera obligaciones fiscales directas explícitas para el Gobierno Nacional.
2. Existen riesgos fiscales indirectos asociados al tratamiento tarifario de los costos de reconexión.
3. Se identifican riesgos fiscales contingentes derivados de la posible afectación financiera de empresas comercializadoras públicas o mixtas.
4. El impacto fiscal final dependerá de decisiones regulatorias posteriores de la CREG y de la respuesta comportamental de los usuarios.

Recomendaciones técnicas de política pública.

- Definir explícitamente en la ley el tratamiento regulatorio de los costos de reconexión.
- Realizar análisis cuantitativo del efecto en subsidios bajo distintos escenarios tarifarios.
- Evaluar impacto diferenciado en empresas públicas territoriales.
- Incorporar mecanismos regulatorios que mantengan incentivos adecuados de pago.